



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN  
SALA PRIMERA DE DECISION CIVIL

Medellín, diez (10) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

RADICADO: 05001 31 03 013 2017 00550 03

MAGISTRADO: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS

Proceso: Acción Popular

Sentencia: 001

Demandante: BERNARDO ABEL HOYOS MARTÍNEZ con coadyuvancia.

Demandado: REDITOS EMPRESARIALES S.A. y vinculados.

Extracto: La acción popular está prevista para garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, entre los que están los de las personas con movilidad reducida, donde la salvaguarda de lo pertinente se logra, entre otros, con la materialización de mecanismos de integración social; sin embargo, estando ante un hecho superado y acogiendo el principio “*nadie está obligado a lo imposible*”, se revoca la decisión atacada.

ASUNTO A TRATAR

Después de cumplida la medida de saneamiento dispuesta por el Tribunal en providencia del 4 de abril de 2022, procede la Sala a proferir sentencia de segunda instancia, resolviendo el recurso de apelación interpuesto por AMBAS PARTES, contra la sentencia calendada el once (11) de noviembre del año dos mil veintidós (2022)<sup>1</sup>, proferida por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, dentro de la

---

<sup>1</sup> Archivo 142 cuaderno 1 principal.

acción popular incoada por BERNARDO ABEL HOYOS MARTÍNEZ contra REDITOS EMPRESARIALES S.A., trámite al que se vinculó a las también personas jurídicas INMUEBLES J & P S.A.S., INVERCAMI S.A.S., INVERLUSA S.A.S., INVERSUEÑOS S.A.S., y a S.S. INVERSIONES S.A.S.<sup>2</sup>; previos:

## ANTECEDENTES

### DE LA ACCION:

Se presentó la demanda en estudio con las siguientes pretensiones:

*“Determinar en sentencia de mérito (art. 34 L-472) que hoy: la accionada propietaria de este establecimiento no tiene adecuados sus accesos y por lo tanto incurre en la violación de la normatividad que la obliga desde 1.997 (L.361). y las demás de Ley.”*

Como sustento fáctico de lo anterior, se adujo que:

*“La existencia de una barrera arquitectónica que entorpece la autónoma movilidad de personas en estado de discapacidad ubicado en Medellín, avenida san juan con Carabobo.”<sup>3</sup>*

En coadyuvancia del anterior, el ciudadano DIEGO ALEJANDRO URIBE ESCOBAR, se limitó a decir “... *me adhiero a las pretensiones*

---

<sup>2</sup> Los vinculados lo fueron en su condición de propietarios del inmueble donde se ubica el establecimiento de comercio primigeniamente accionado, el cual se identifica con matrícula inmobiliaria 001-533484 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín.

<sup>3</sup> ver archivo “002DemandaAccionPopular” expediente digital.

*de ésta ACCION POPULAR en defensa de los derechos colectivos a la Defensa del Patrimonio Público, al Acceso a los Servicios Públicos y a que su Prestación sea Eficiente y Oportuna...”* (archivo “022EscritoDeCoadyuvancia” cuaderno 1).

#### DE LA CONTRADICCIÓN:

REDITOS EMPRESARIALES S.A. después de replicar a los hechos dijo que no existe la barrera arquitectónica alegada por el actor, pues su establecimiento cuenta con rampa de acceso, la cual fue construida para mejorar las condiciones de todos sus usuarios, en consecuencia, no existe vulneración a los derechos colectivos invocados en la acción.

Por lo mismo presentó la excepción de mérito que denominó “*BUENA FÉ*”, argumentando que ha ejercido su objeto social según lo rotulado, cumpliendo a cabalidad sus obligaciones legales; y los contratos de arrendamiento del local comercial para desarrollar su objeto social, se ejecutan conforme la normatividad comercial (ver archivo 116 principal).

Los vinculados INMUEBLES J & P S.A.S., INVERCAMI S.A.S., INVERLUSA S.A.S., INVERSUEÑOS S.A.S., y S.S. INVERSIONES S.A.S., en diferentes escritos pero con el mismo formato (archivo 118 principal), al unísono manifestaron “*coadyuvar al proceso*” para evitar vulneración a los derechos de la comunidad, estando a disposición de cumplir lo dispuesto por el Juzgado, pero sin que presentaran oposición.

La Procuraduría General de la Nación a través del Delegado para Asuntos Civiles, después de referir generalidades sobre el asunto que nos ocupa, concluyó que:

*“Si las pruebas demuestran que el inmueble en donde opera el establecimiento de comercio de la sociedad demandada ubicado en la calle San Juan con carrera Carabobo de Medellín, es abierto al público y no cuenta en sus instalaciones con las adecuaciones completas para el acceso a personas con discapacidad o existen barreras arquitectónicas que impidan el ingreso de personas con movilidad reducida, solicito se acoja la pretensión de la acción popular y se impartan órdenes para la adecuación del inmueble.” (ver archivo 120 principal).*

La Defensoría del Pueblo presentó memorial identificando el asunto que nos ocupa, destacando desde lo normativo su misión institucional, pero sin que nada relevante aportara a las presentes (archivo 123 principal).

#### DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Después de referir a la acción, actuación procesal realizada, contradicciones e intervenciones, y alegatos conclusivos, ya en la parte considerativa luego de verificar la competencia, hizo alusiones generales y normativas en relación a la acción popular, los derechos e intereses colectivos, para luego pasar al tema de la protección del espacio público y al derecho de accesibilidad de las personas con movilidad reducida.

Sobre el “*caso concreto*”, recapitulando sobre la demanda, haciendo un recuento de las modificaciones realizadas al inmueble de cara a la accesibilidad, incluso incorporando material fotográfico arrimado, después de aludir a las pruebas recaudadas, concluyó que de las fotografías, así como del informe técnico rendido por la Subsecretaría de Gestión y Control Territorial, llevan a concluir la trasgresión legal y la afectación de derechos e intereses colectivos.

De ahí que como la rampa permanece en las mismas condiciones en las que se encontraba para el año 2021, y no existe prueba de su modificación, procede la protección; ordenando a la accionada y a las sociedades vinculadas como propietarias del inmueble, que deben hacer las adecuaciones y/o modificaciones pertinentes para ajustar la rampa para el ingreso al establecimiento. También condenó en costas a la demandada pero sin reconocerle agencias en derecho, siendo la decisión de conformidad (ver archivo 142 principal).

Inconformes con la decisión, ambas partes la apelaron.

Las vinculadas indicaron que conforme al concepto técnico arrimado, cuestionándolo en el sentido que si hicieran la rampa al exterior del edificio, ahí sí se estaría vulnerando el derecho colectivo al espacio público, por lo que las adecuaciones realizadas con razonables, deprecando revocar la decisión de primera instancia.

El actor hizo énfasis en la duración de la presente acción, cuestionando que no se le reconociera agencias en derecho, aspecto se desmotiva la

participación ciudadana, por lo que deben acogerse las pretensiones y la condena por tal rubro deben ser al máximo, para lo que se apoyó en doctrina del Consejo de Estado, la cual fue reproducida en extenso.

La demandada aludiendo al informe técnico en el que el *a quo* basó la decisión (según el cual la pendiente máxima debe ser del 8% por lo que si la de la rampa en debate lo tiene del 19% infraccionaría la norma), indicó que ese estudio no se ajusta a la última versión de la norma ICONTEC NTC 4143, la que en su numeral 4.1.1.2 (actualización 3), dice que las pendientes para rampas serán: 1) entre 10 y 15 metros de longitud, 8%; 2) entre 3 y 10 metros de longitud, 10%; y 3) en las de hasta 3 metros, será del 12%.

Entonces como la longitud de la rampa en cuestión no sobrepasa los 1.61 metros, no le es exigible el 8% de pendiente, además que el informe incluye el concepto de “*ajuste razonable*”, por lo que tal elemento probatorio no es suficiente para decidir.

#### DEL TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA:

Admitido el recurso por auto del 5 de diciembre anterior y corrido traslado para alegar, las partes se pronunciaron así:

El demandante reiteró la duración del proceso, y con base en doctrina atacó la decisión en cuanto no le reconoció las agencias en derecho, lo

que cuestiona por lo que pide acoger lo resuelto sobre el particular en Sentencia de Unificación del Consejo de Estado, reclamando las agencias en derecho en su “*tarifa máxima*”.

Por su parte, la demandada insiste en que el informe técnico municipal, no se ajusta a la última versión de la norma NTC 4143, pues debe considerarse la tercera actualización, de lo que se tiene que la rampa cuestionada tiene una longitud de 1.61 metros, por lo que no le es exigible la pendiente máxima del 8%, pues esta aplica a rampas de entre 10 metros y 15 metros.

De todos modos, citando el informe técnico, hace preguntas sobre el concepto “*ajuste razonable*”, por lo que debe aplicársele el artículo 168 del C. G. del P..

Así las cosas, sin advertirse causal de nulidad y cumplidos los presupuestos procesales<sup>4</sup>, se resolverá el recurso en estudio, previas:

## CONSIDERACIONES

---

<sup>4</sup> Dichos presupuestos procesales, son la capacidad para ser parte y comparecer al proceso, la competencia del juez, y la idoneidad de la demanda que ha dado origen a la acción. En cuanto la competencia del *a quo* y de esta Corporación para conocer el asunto, se establece del artículo 16 de la ley 472 de 1998, norma que en su inciso primero reza; “*De las Acciones Populares conocerán en primera instancia los jueces administrativos y los jueces civiles de circuito. En segunda instancia la competencia corresponderá a la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal de Distrito Judicial al que pertenezca el Juez de primera instancia.*”.

## INTROITO:

La apelación tiene como objetivo que el Superior funcional estudie el asunto decidido en primera instancia, con el fin de revocar o reformarlo.

Las acciones populares, consagradas en el artículo 88 Constitucional y reglamentadas por la ley 472 de 1998, tienen por objeto la protección de los derechos e intereses colectivos cuando resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares, siendo medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos<sup>5</sup>, por lo que se trata de un instrumento para el resguardo del patrimonio, espacio, seguridad y salubridad pública, moral administrativa, ambiente, libre competencia económica, entre otros; de donde el artículo 4º de la Ley 472 en cita, establece:

*“Art. 4º.- derechos e intereses colectivos.*

*“Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:*

*... m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes;”*

El criterio de valoración de la afectación de los derechos e intereses colectivos que son objeto de protección a través de las acciones populares, es de carácter legal, pues está previsto en el artículo 7º de la ley 472 de 1998, que preceptúa:

---

<sup>5</sup> Según el primer supuesto normativo; “... se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible...”



*“Artículo 7º.- Interpretación de los derechos protegidos. Los derechos e intereses protegidos por las acciones populares y de grupo, de conformidad con el artículo 4º de la presente Ley se observarán y aplicarán de acuerdo a como están definidos y regulados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales que vinculen a Colombia.”*

En armonía con lo anterior y en relación al acceso a edificios o instalaciones públicas o privadas de personas con limitaciones físicas, ello también está salvaguardado en el artículo 13 de la Carta Política, visto en armonía con el artículo 47 del mismo texto<sup>6</sup>.

En coherencia con lo planteado, las leyes 12 de 1987 y 361 de 1997, en sus apartes pertinentes, indican:

*“Artículo 1.- Los lugares de los edificios públicos y privados que permiten el acceso al público en general deberán diseñarse y construirse de manera tal que faciliten el ingreso y tránsito de personas cuya capacidad motora o de orientación esté disminuida por la edad, la incapacidad o la enfermedad.*

*“Parágrafo.- Deberán acogerse a lo dispuesto en la presente ley: las construcciones destinadas a la prestación de servicios de salud, como hospitales, clínicas y centros médico-asistenciales; los centros de enseñanza en los diversos niveles y modalidades de la educación; los escenarios deportivos; los cines y teatros; los edificios de la administración pública; los edificios donde funcionen servicios públicos; los supermercados; los centros comerciales; las fábricas; los bancos y demás establecimientos del sector financiero; las iglesias; los aeropuertos; las terminales de transporte; los parqueaderos y los medios de transporte; los museos y los parques públicos.”*

Y;

*“ARTÍCULO 44. Para los efectos de la presente ley, se entiende por accesibilidad como la condición que permite en cualquier espacio o ambiente interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general, y el uso en forma confiable y segura de los servicios instalados en estos*

---

<sup>6</sup> Rezan las normas superiores en cita y en su orden; “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.” (inciso 2º); y “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.”, respectivamente.

*ambientes. Por barreras físicas se entiende a todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos que limiten o impidan la libertad o movimiento de las personas. Y por telecomunicaciones, toda emisión, transmisión o recepción de señales, escrituras, imágenes, signos, datos o información de cualquier naturaleza, por hilo, radio u otros sistemas ópticos o electromagnéticos.*

...

*“ARTÍCULO 47. La construcción, ampliación y reforma de los edificios abiertos al público y especialmente de las instalaciones de carácter sanitario, se efectuarán de manera tal que ellos sean accesibles a todos los destinatarios de la presente ley. Con tal fin, el Gobierno dictará las normas técnicas pertinentes, las cuales deberán contener las condiciones mínimas sobre barreras arquitectónicas a las que deben ajustarse los proyectos, así como los procedimientos de inspección y de sanción en caso de incumplimiento de estas disposiciones.*

*“Las instalaciones y edificios ya existentes se adaptarán de manera progresiva, de acuerdo con las disposiciones previstas en el inciso anterior, de tal manera que deberá además contar con pasamanos al menos en uno de sus dos laterales.*

*“El Gobierno establecerá las sanciones por el incumplimiento a lo establecido en este artículo.” Subrayados fuera del texto.*

De la última norma se tiene que dichas previsiones están sujetas a desarrollo, pues indica que el Gobierno reglamentará las pautas técnicas ajustadas para la protección de personas con movilidad reducida, punto del que la jurisprudencia indicó:

*"Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha dado aplicación a los postulados superiores que imponen al Estado una especial protección a favor de las personas discapacitadas, quienes, aunque padezcan alguna limitante física o psicológica, son sujetos que se encuentran en las mismas condiciones que el resto de las personas para vivir en comunidad. Al respecto ha dicho la Corte:*

*““En el curso de la historia, las personas discapacitadas han sido tradicional y silenciosamente marginadas. A través del tiempo, las ciudades se han construido bajo el paradigma del sujeto completamente habilitado. La educación, la recreación, el transporte, los lugares y los medios de trabajo, incluso el imaginario colectivo de la felicidad, se fundan en la idea de una persona que se encuentra en pleno ejercicio de todas sus capacidades físicas y mentales. Quien empieza a decaer o simplemente sufre una dolencia que le impide vincularse, en igualdad de condiciones, a los procesos sociales – económicos, artísticos, urbanos -, se ve abocado a un proceso difuso de*

*exclusión y marginación, que aumenta exponencialmente la carga que debe soportar.”*

*“La marginación que sufren las personas discapacitadas no parece obedecer a los mismos sentimientos de odio y animadversión que originan otro tipo de exclusiones sociales (raciales, religiosas o ideológicas). Sin embargo, no por ello es menos reprochable. En efecto, puede afirmarse que se trata de una segregación generada por la ignorancia, el miedo a afrontar una situación que nos confronta con nuestras propias debilidades, la vergüenza originada en prejuicios irracionales, la negligencia al momento de reconocer que todos tenemos limitaciones que deben ser tomadas en cuenta si queremos construir un orden verdaderamente justo, o, simplemente, el cálculo según el cual no es rentable tomar en cuenta las necesidades de las personas discapacitadas. Estas circunstancias llevaron, en muchas ocasiones, a que las personas con impedimentos físicos o psíquicos fueran recluidas en establecimientos especiales o expulsadas de la vida pública. Sin embargo se trataba de sujetos que se encontraban en las mismas condiciones que el resto de las personas para vivir en comunidad y enriquecer –con perspectivas nuevas o mejores-, a las sociedades temerosas o negligentes para las cuales eran menos que invisibles.”*

*“De acuerdo con lo señalado, cualquier discriminación que se imponga a una persona con ocasión de su discapacidad, por intrascendente que parezca, no deja de ser reprochable en un Estado democrático y constitucional de derecho. Así entonces, se deberán “remover los obstáculos que impidan la adecuada integración social de los discapacitados en condiciones de igualdad material y real, no meramente formal, sin que ello signifique desconocer que las órdenes correspondientes son de ejecución compleja”<sup>7</sup>. Citas y cursivas en el texto.*

Concluyendo parcialmente, los derechos colectivos deben ser protegidos, máxime los de las personas con movilidad reducida.

## DEL PROBLEMA JURÍDICO:

La demandada ha insistido que no vulnera los derechos colectivos, y que la normatividad considerada para resolver el caso, no está

---

<sup>7</sup> Corte Constitucional, Sentencia T-030/10. 28 de enero de 2010. Las citas corresponden en su orden a demandas por esa misma Corporación en sentencias T-823-99 y T-595-02.

actualizada, pues la rampa fue erigida dentro de las posibilidades de construcción, por lo que los problemas jurídicos a resolver se enuncian así: ¿la demandada y los vinculados han violado los derechos colectivos reclamados?, y ¿existe alguna justificación en el proceder de la demandada y vinculadas?

Solamente superado lo anterior, ahí si será del caso pronunciarse respecto a la alzada formulada por el actor, la cual se circunscribe a reclamar el que no se le hubieran reconocido agencias en derecho.

#### RESOLUCIÓN DEL CASO EN CONCRETO:

Se demanda por la ausencia de acceso adecuado para personas con limitaciones físicas, a la sucursal del comercio denominado “GANA” ubicado en la calle 44 No 51 – 51 (calles San Juan con Carabobo) de la ciudad Medellín, establecimiento aquel que hace parte del ejercicio empresarial de la accionada y cuyos propietarios del correspondiente edificio son las vinculadas, punto que no es objeto de debate.

Frente a lo anterior, antes que se desatara la primera instancia, aparte de una primera rampa metálica, la primigenia demandada construyó un repecho nuevo, del que el ente municipal encargado de la materia, del que la SUBSECRETARÍA DE CONTROL URBANÍSTICO DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL de la Alcaldía de Medellín, en un último concepto graficó la rampa así:

Para un desnivel:  $0,30 \text{ m} < d \leq 0,80 \text{ m}$ , la pendiente máxima será del 8 %.

Gráfico 2. Tomado de la Norma NTC 4143.

Accesibilidad de las personas al medio físico. edificios, rampas fijas, numeral 3.3.1 Pendiente longitudinal

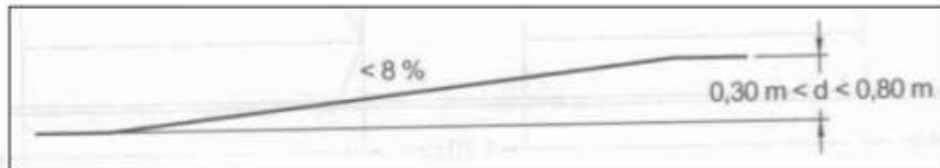


Gráfico 3. Tomado de la Norma NTC 4143.

Accesibilidad de las personas al medio físico. edificios, rampas fijas, numeral 3.3.1 Pendiente longitudinal

Consultada la base de datos del Sistema de Información **Visor 360 del Municipio de Medellín**, y las cuatro Curadurías Urbanas de Medellín, no se encontró licencia urbanística para la edificación objeto de la solicitud.

El mismo informe técnico dejó en claro que el elemento de acceso no cumple con lo dispuesto en la Norma Técnica Colombiana, indicando “... toda vez que supera la pendiente máxima permitida, dado que, la pendiente de la rampa en cuestión es de 19%, siendo superior a la máxima establecida.”, que en ese caso debía ser del 8%.

Lo anterior, fue acompañado de fotografías del lugar, las cuales son:



Registro fotográfico 1. Gana Servicios, Rampa de acceso.



En el anterior estudio, que sin ser experticia sí se tiene como sólido, claro, exhaustivo, preciso y fundado, se llega a la siguiente conclusión:

*“En consecuencia, se determina que, si bien, el local comercial presenta habilitada una rampa para el ingreso a personas con movilidad reducida, no cumple con las exigencias establecidas con relación a la pendiente constituyendo una barrera para las personas con movilidad reducida según la norma NTC4143 numeral 3.3.1 pendiente longitudinal, la cual deberá ser de máximo el 8%. Sin embargo, por tratarse de una edificación antigua y al no tener espacio suficiente para que se desarrolle una rampa al interior del establecimiento de la referencia, se debe aplicar el concepto de ajuste razonable.” (folio 6 archivo 133 principal).*

A propósito de lo mismo, el *a quo* lo desatendió indicando que el concepto “*ajuste razonable*”, no fue desarrollado en el aludido informe.

Pues bien, en primer lugar las palabras han de entenderse en el sentido natural y obvio, y si estas son técnicas, aunque sea en leyes también se

pueden evaluar en documentos oficiales, de lo que el artículo 29 del C.C. consagra; “*Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso.*”.

De lo anterior, si el *a quo* tenía dudas sobre qué significaba tal concepto, “*ajuste razonable*”, debió pedirle aclaración al ente municipal, ya que ello es un deber de cara a resolver el asunto puesto en consideración, tal como lo dispone el artículo 42.4 del C. G. del P..

De todos modos, la cuestión no era tan difícil, en la medida que entendido el vocablo ajuste como “*acción y efecto de ajustar*”, y ajustar a su vez entraña “... *que no haya discrepancia... Conformar, acomodar algo a otra cosa... que sus varias partes casen... Concertar*”<sup>8</sup>; mientras que “*razonable*” es “*Adecuado, conforme a razón*”<sup>9</sup>; entonces, puede colegirse, que la rampa fue construida dentro de las posibilidades que existían, donde si bien tiene diferencia con la norma técnica, ello no implica violación de los derechos reclamados, tal como se seguirá exponiendo.

La norma técnica indica:

“Se establecen las siguientes pendientes longitudinales máximas para los tramos rectos de rampa entre descansos, en función de la extensión de los mismos medidos en su proyección horizontal:

---

<sup>8</sup> Ver Diccionario de la Lengua Española, Real Academia de la Lengua, Edición Tricentenario, 2022.

<sup>9</sup> Op. cit.

“Entre 10 metros y 15 metros de longitud, la pendiente máxima debe ser del 8%.  
“Entre 3 metros y 10 metros de longitud, la pendiente máxima debe ser del 10%.  
“Para las longitudes de hasta 3 metros, la pendiente máxima debe ser del 12%”<sup>10</sup>

Es importante tener en cuenta que según esta misma fuente;

“El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, es el organismo nacional de normalización, según el Decreto 2269 de 1993.  
“ICONTEC es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya Misión es fundamental para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al consumidor. Colabora con el sector gubernamental y apoya al sector privado del país, para lograr ventajas competitivas en los mercados interno y externo.”

Por lo anterior, tales criterios técnicos son de recibo, pero a lo mismo no se le puede dar el alcance normativo de los enunciados en el artículo 7º de la ley 472 de 1998.

Entonces, el estándar técnico indica que la rampa de marras, de la que es pacífico que tiene una longitud de 1.61 metros, no se le puede aplicar el criterio consistente en que su inclinación deba ser del 8%, por lo que en tal sentido se disiente de la infracción normativa considerada por el *a quo* para decidir.

Ahora, en tal longitud para superar los 31 centímetros que hay de desnivel, obviamente existe explicación que la inclinación sea la advertida, o sea, 19%, pero es más, de las mismas fotografías arrimadas al plenario, se tiene que no existen espacios adicionales para alargar la rampa y de esta manera bajar el porcentaje de inclinación, por

---

<sup>10</sup> Ver en <https://www.mincit.gov.co/ministerio/ministerio-en-breve/docs/4143.aspx#:~:text=Esta%20norma%20establece%20las%20dimensiones,el%20acceso%20a%20las%20personas.,> refiere NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4143



lo que debe adoptarse para resolver el caso el principio de “*nadie está obligado a lo imposible*”, del cual las altas Cortes han enunciado:

“... No obstante, puede ocurrir que el incumplimiento obedezca a situaciones que hacen que la orden impartida sea materialmente imposible de acatar.”. Corte Constitucional, Auto 203/16 dentro del trámite de cumplimiento de la sentencia T-554 de 2009. 13 de mayo de 2016.

“Uno de los principios generales del derecho, orientadores de la labor judicial, es aquel, según el cual “*nadie está obligado a lo imposible*”, aplicado, para resolver diferentes asuntos,...”. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, E-11001-22-10-000-2020-00126-01, 11 de mayo de 2020.

“... dado que “*nadie está obligado a lo imposible*”, aunque se destaca que esta misma Corporación, en providencias posteriores, ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si, en efecto, fue imposible cumplir aquéllas que en relación con el caso concreto le correspondían.”. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A, 7 de diciembre de 2016, Rad. 50001-23-31-000-2005-20104-01(35455)

Siendo así las cosas, y atendiendo el concepto de “*ajuste razonable*”<sup>11</sup> enunciado en el concepto técnico municipal atrás citado, deberá considerarse que la demandada al construir la última rampa referida, ha cumplido con el respeto a los derechos reclamados, debiéndose aplicar de cara a las presentes el concepto de hecho superado<sup>12</sup>, y bajo la

---

<sup>11</sup> Este ha sido definido por la RAE, así: “*adm. Adaptación necesaria y adecuada del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, que no imponga una carga desproporcionada o indebida, cuando se requiera en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de todos los derechos.*”. Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. 2020,

<sup>12</sup> Figura jurídica de la que la Corte Constitucional ha dicho; “... *En repetidas oportunidades la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto a la improcedencia de la acción de tutela cuando el motivo o la causa de la vulneración del derecho ya no existe, toda vez que, en estos*

perspectiva de la acción popular restitutoria, el asunto queda sin objeto, toda vez que la pretensión principal recibió solución y ante tal situación no hay lugar a declarar responsabilidad alguna.

### **De la apelación del actor:**

La alzada del demandante se circunscribe al reconocimiento de agencias en derecho, lo que solo sería objeto de análisis si sus pretensiones prosperaran. En este punto debemos atenernos a lo regulado en el artículo 365 del C. G. del P., que establece un sistema objetivo para la condena en costas, donde tal disposición en sus numerales 1º y 4º, prevén:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

“Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.”

Así, la parte vencida será condenada en costas, donde lo que corresponde al ítem agencias en derecho, en este caso las súplicas de la demanda no prosperaron, por lo que debía ser el actor el condenado, pero como no se estableció que la acción hubiera sido temeraria o de mala fe, se procederá como lo prevé el artículo 38 de la ley 472 de 1.998.

---

*casos, cualquier pronunciamiento que pudiera hacer el juez de tutela para remediar la situación que afecta el derecho resultaría ineficaz” 4 de julio de 1.997. T-321-97.*

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley:

### RESUELVE

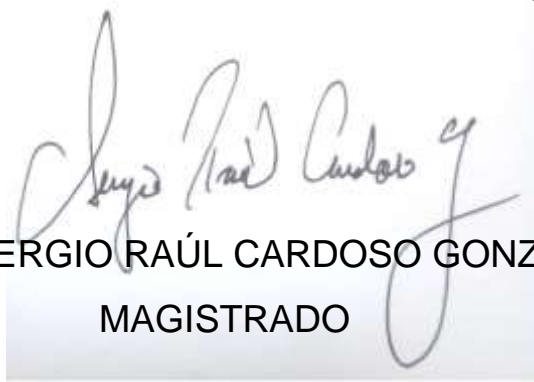
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del once (11) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), proferida por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, dentro de la Acción Popular de la referencia, para en su lugar DESESTIMAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin costas en ninguna de las instancias según lo motivado. El *a quo* suministrará la información prevista en el artículo 80 de la ley 472 de 1.998.

Notifíquese;



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS  
MAGISTRADO



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ  
MAGISTRADO



MARTÍN AGUDELO RAMÍREZ  
MAGISTRADO